

Rancagua, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós.

Vistos:

En estos autos Rit O-112-2021 del 1° Juzgado de Letras de Rengo, doña Soledad María Valenzuela Román, interpone demanda en Procedimiento de Aplicación General por Reconocimiento de Relación Laboral, Nulidad del Despido, Despido Injustificado y Cobro de Prestaciones Laborales adeudadas, en contra de la ex empleadora, la Ilustre Municipalidad de Rengo, cuyo representante legal es don Carlos Ernesto Soto González y, solicita que se declare: 1) que entre las partes existió relación laboral entre el día 3 de mayo de 2012 hasta el 30 de junio de 2021; 2) la continuidad de los servicios prestados por la demandante a favor de la Ilustre Municipalidad de Rengo desde el día 3 de mayo de 2012 hasta el 30 de junio de 2021; 3) que la demandada pague las siguientes prestaciones: a) la indemnización sustitutiva de aviso previo por el monto de \$1.700.000; b) la indemnización por años de servicios correspondientes a 9 años de servicio, por el monto de \$15.300.000; c) el recargo del 50% de las indemnizaciones por años de servicio, por el monto de \$7.650.000; d) Feriado legal por la suma de \$11.106.666; e) Feriado proporcional por la suma de \$134.300 que equivalen a 2,37 días; f) Cotizaciones de seguridad social durante todo el periodo que duró la relación laboral; g) Las que deriven de la aplicación de los incisos 5° y 7° del artículo 162° del Código del Trabajo, todo lo anterior con los reajustes e intereses que por ley corresponda, con costas de la causa.

La demandada opuso a la demanda las excepciones de incompetencia y caducidad y, en cuanto al fondo, niega categóricamente los hechos contenidos en la demanda en cuanto a que la demandante prestó servicios personales para su representada, bajo vínculo de subordinación y dependencia en los términos del artículo 7° del Código del Trabajo.

Ambas partes rindieron prueba.

Dictando sentencia el Tribunal acogió la demanda, declarando la existencia de la relación laboral y declarando



injustificado el despido, condenando a la demandada al pago de las prestaciones que en ella se indican, sin costas.

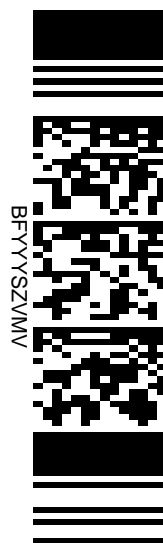
En contra de la citada sentencia la parte demandada dedujo recurso de nulidad fundado en la causal contenida en el artículo 477 y 478 letras b) y e) del Código del Trabajo, solicitando a esta Corte que anule la sentencia y dicte la de reemplazo que corresponda. La demandante dedujo también recurso de nulidad por la causal del artículo 477 del mismo cuerpo normativo, solicitando que se anule la sentencia y se dicte la de reemplazo que acoja la demanda por nulidad del despido y pago de cotizaciones previsionales.

Se declaró admisible el recurso y se realizó la audiencia de rigor en la que se escuchó el alegato de las partes, quedando luego la causa en estado de acuerdo.

Considerando:

Primero: Que, la parte demandada y demandante, dedujeron en contra de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, recurso de nulidad fundado, según se adelantara, en las causales del artículo 477 y 478 letras b) y e) y 477 del Código del Trabajo, respectivamente.

Segundo: Que, explicando su recurso la parte demandada, en relación a la causal principal, señala que se configura por cuanto la sentencia ha concluido en forma errónea que efectivamente existió entre las partes una relación laboral, al estimar acreditados cada uno de los elementos del artículo 7° del Código del Trabajo, relación que estimó estable y permanente, con lo cual aplicó consecuentemente en forma indebida las normas de los artículos 162, 163 y 168 del mismo cuerpo legal, descartando que el vínculo jurídico entre las partes se rigió por lo dispuesto en el artículo 4° incisos 2° y 3° de la Ley N° 18.883 que Aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, hasta el año 2018, y a través del artículo 107 del Decreto Supremo N° 250 Reglamento de la ley 19.886 hasta junio del año 2021. A su vez, omitió la aplicación del artículo 168 inciso 1° del Código laboral, toda vez que no dio lugar a la excepción de caducidad de la acción, en circunstancias que éstas son las

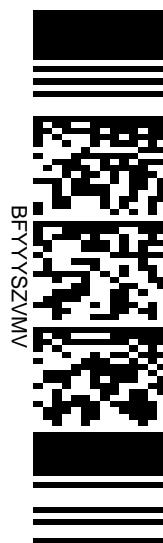


normas aplicables conforme el mérito del proceso y la legalidad vigente.

Agrega que a la actora, se le reconocieron ciertos beneficios en sus contratos a honorarios, pero jamás se señaló que la actora no haya tenido beneficios contractuales. No es posible que se utilice el hecho de existencia de beneficios como premisa de existencia de subordinación o dependencia. La obligación de asistencia no es indiciario de subordinación o dependencia, sino solo para efectos del pago de sus honorarios: recibía el total mensual pactado, solo si no faltaba injustificadamente; de otra forma, se le descontaba proporcionalmente, en base al principio de evitar el enriquecimiento sin causa. Es más, el texto de los contratos ha ido variando justamente con el objeto de clarificar que la asistencia no es obligatoria en los términos de una relación laboral, sino solo para efectos del pago. Así se puede ver que en los contratos del año 2016 y 2017, la actora estaba afecta a las necesidades del servicio, con lo cual, no era obligatorio un cumplimiento de horario, sino solo de 44 horas mensuales, y a partir del año 2018 se circunscribe aun más.

Indica que se les hizo efectivo el apercibimiento del artículo 453 N° 5 del Código Laboral, por no haber exhibido los contratos anteriores al año 2013. No obstante en estrados, se señaló que aquellos no existían en la municipalidad, como reza el aforismo, "a lo imposible nadie está obligado", esta decisión de la magistrado es totalmente injusta, ya que cuando se requirieron los documentos a RRHH de la municipalidad, se señaló que no existía documentación en la carpeta funcionaria anteriores al año 2013. Por lo tanto, su parte se encontraba impedida de exhibir documentación con la que no cuenta, y el apercibimiento es arbitrario e injusto, por lo que debe ser dejado sin efecto.

Concluir que con el hecho de que una dependencia técnica y administrativa a quien la actora debía informar de su labor a través de informes mensuales como una dependencia en los términos del Código laboral, es torcer en demasía los



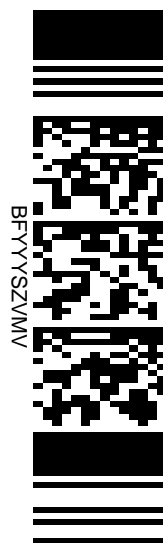
conceptos, para hacerlos ajustar a la premisa de la norma legal.

La conclusión a que arriba la sentenciadora en el motivo décimo séptimo implica la no aplicación del artículo 4° de la Ley N° 18.883.

La jueza de autos, simplifica el uso de las premisas, normas legales y de competencia, para asimilar con infracción a los principios de la sana crítica, al hacer una comparación banal simple de las funciones de uno y otro tipo de contratos (ambos de carácter civil/comercial), sin hacer un mínimo estudio de las testimoniales de su parte, ni de la abundante y definitiva prueba documental aportada por su representada. Así, desconoce que la norma infringida en la sentencia, la ley 19.886 y el D.S. 250 de 2004, versa sobre contratos administrativos y suministro y prestación de servicios, en virtud de la cual, los municipios están facultados (y obligados) a acudir y someterse a sus disposiciones, en el evento en que quieran con tratar con terceros la adquisición de bienes y servicios.

Por lo tanto, el legislador sostuvo que a través de esta normativa se pueden contratar servicios personales especializados en los términos señalados, lo que no puede implicar que aquellas relaciones nacidas bajo el cumplimiento de sus normas y requisitos, sean de carácter laboral, ya que, se trata de una norma legal que rige a las relaciones contractuales que se originan a su amparo, las que tendrán siempre el carácter de civil/comercial, en razón al ámbito de competencia, jurisdicción y aplicación de la ley a la que se somete. Por lo tanto, pretender que este cuerpo normativo- como lo pretende asimilar la jueza del grado- puede llegar a constituir una relación laboral en los términos del artículo 1° del Código laboral, implica una desnaturalización expresa, arbitraria y contraria a derecho de una ley que taxativamente ha sido concebida para otros menesteres.

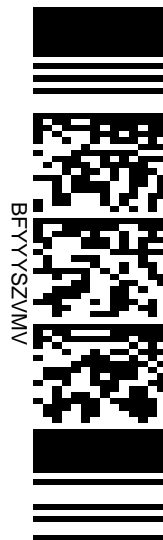
En su sentencia, la jueza da por hecho que las funciones entre los contratos a honorarios de la actora entre 2013 y 2018, tiene similitud con los productos requeridos por los



contratos de servicios especializados de los años 2018 a 2020, y por lo tanto, se trató de una continuidad de servicios; y por haber concluido en los considerandos previos que desde el 2013 al 2018 se trató de una relación laboral, y existir continuidad en servicios de igual calidad, finaliza concluyendo que existió relación laboral por el período 2012 a 2020. De la sola lectura y con la utilización de una mínima comprensión de los productos que se requerían contratar, se puede establecer claramente una diferenciación entre ambas contrataciones (a honorarios y servicios especializados). En efecto, a través del artículo 107, se contrató a la actora para que entregase una serie de productos en cuya elaboración primaba el uso de un intensivo desarrollo intelectual pues comprendía el diagnóstico, conocimiento, elaboración de metodologías o procedimientos que sirvieran de insumos para luego ser aplicados en las materias correspondientes, distinto a las funciones más prácticas o si se quiere, meramente administrativas o de ejecución, más que de generación de métodos. Con lo cual, estima que la equivalencia que le otorga la juez a ambas funciones para dar lugar a la conclusión de existencia de una relación laboral continua, es extremadamente débil, superflua y superficial, y facilista, no llegando a comprender las distinciones entre unas y otras.

Como se aprecia, al existir norma expresa que regula la relación contractual entre las partes (Ley 19.886 y D.S. 250, artículo 107 y ley 18.883), que impide a la jueza asimilar dicha relación a una de carácter laboral, en los términos de la letra a) del artículo 420 del Código el ramo, aquella debió declarar a lugar la excepción de incompetencia que se interpuso.

Sin perjuicio de lo anterior, si la jueza hubiere determinado que la relación con la actora hasta el año 2018 por determinar que no procedía la aplicación del artículo 4° de la ley 18.883- tal como subsidiariamente se señaló por esta parte en la contestación de la demanda-, y hubiere sido declarada como relación laboral aquella (por período 2012 a

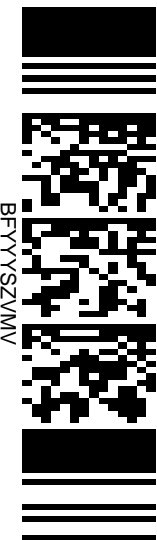


2018), debió haber aplicado la norma legal expresa del artículo 168 del Código Laboral, y dar curso a la excepción de caducidad de la acción, toda vez que transcurrió el plazo de 60 días para interponer la acción de despido injustificado, nulidad del despido y prestación de seguridad social, justamente la acción que se interpuso por la actora y cuya sentencia se recurre.

Tercero: Que, explicando su recurso en cuanto a la primera causal subsidiaria, señala que la sentenciadora falló la controversia sometida a su conocimiento con palmaria infracción a las normas sobre la apreciación de la prueba. No existen los fundamentos jurídicos, lógicos, racionales sobre los cuales basa su decisión, lo que permite determinar la forma y modo en que construyó su argumentación intelectual a fin de resolver el pleito, en el sentido de tener por acreditado que entre las partes existió una relación de carácter laboral. Al contrario, existe una débil y poco profunda interpretación de hechos, actos y contratos diversos, asimilándolos como iguales, y de las mismas características, haciendo que el ejercicio de la sana crítica, se transforme en un ejercicio simplón, creyendo que situaciones diversas son en realidad equivalentes, y que en razón de dicho pensamiento conclusivo, la relación que unió a demandante y demandada se trató de una relación laboral en los términos del artículo 7° del Código laboral.

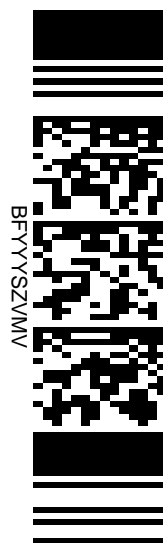
Agrega que no existe análisis de toda la prueba rendida en autos, y un nulo análisis de la prueba de su parte. De la lectura de la sentencia, se puede observar que en la parte considerativa, parte en que el Juez debe contrarrestar las pruebas documentales y testimoniales presentadas por las partes, no hay alusión alguna al prueba de su representada, la que fue abundante en materia documental y clara, firme y profesional, en la testimonial.

Reprocha también en esta parte el apercibimiento que se le impuso, del artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo, por estimarlo improcedente.



Cuarto: Que explicando su recurso en cuanto a la segunda causal subsidiaria, señala que la sentencia incurre en defectos en su construcción en términos tales que no cumple con las exigencias del numeral 4° del artículo 459 del Código del ramo, pues no analiza toda la prueba rendida e incorporada, ni el razonamiento que conduce estimar probados los hechos, lo que trae aparejada la ausencia absoluta y total de todo tipo de fundamentación, tornándola desprovista de fundamentos de hecho y derecho.

En autos no se analizó, señala, entre otros, el contenido de los decretos Alcaldicios y los términos técnicos de referencia de los tratos directos en conformidad a lo dispuesto en el artículo 107 del D.S. 250 de 2004 Reglamento de compras públicas; tampoco se analizan a conciencia, lo contratos a honorarios, salvo en lo que se establecía respecto de los horarios y las funciones. Inicia el análisis desde una premisa falsa o antojadiza, cual es, que las funciones entre ambas contrataciones al amparo de distintas estatutos y leyes, son equivalentes, y que existía un horario, en circunstancias que en aquellos contratos amparados en el artículo 107 tantas veces citado, no se establece horario ni dependencia alguna; no se rindió prueba alguna que logre desvirtuar aquello; es más, los informes de asistencia que fueron ordenados exhibir, dan cuenta de que desde el año 2019 a 2021, la actora no marcó su entrada ni salida; ni tampoco se concluyó de forma determinante alguna dependencia o subordinación a laguna persona o funcionario en particular, por ende, la apreciación de que éste período de relación contractual constituye una relación laboral, se desmorona por su propio peso, y transforma dicha conclusión en arbitraria y contraria a la prueba y las normas legales. Es más, los informes de asistencia que fueron ordenados exhibir, dan cuenta de que desde el año 2019 a 2021, la actora no marcó su entrada ni salida; ni tampoco se concluyó de forma determinante alguna dependencia o subordinación a alguna persona o funcionario en particular, por ende, la apreciación de que esta período de relación contractual



constituye una relación laboral, se desmorona por su propio peso, y transforma dicha conclusión en arbitraria y contraria a la prueba y las normas legales.

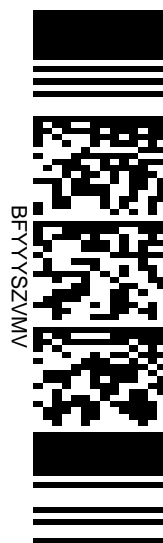
Se remite en esta causal a lo expresado en relación a la anterior en lo que respecta a la prueba testimonial y documental analizada en dicho apartado.

Quinto: Que explicando su recurso la parte demandante señala que la sentencia se dictó con infracción de ley, la que desarrolla en dos fundamentos diversos.

Denuncia en un primer acápite la infracción del artículo 58 del Código del Trabajo, artículo 17 y 19 del decreto ley 3500, por falsa aplicación de ley. Señala que la demandada le adeuda a su representada cada una de las cotizaciones de seguridad social, propias de la existencia de una relación laboral, por todo el período trabajado. Por lo que, corresponde que sea declarada la deuda de dichas cotizaciones y en consecuencia, se ordene al pago de estas. Sin perjuicio que el mismo tribunal declarase la existencia de una relación laboral entre las partes y que el despido fue injustificado, este incurre en una falsa aplicación de ley al dejar de aplicar la norma del artículo 58 del Código del ramo.

La obligación de enterar las cotizaciones previsionales recayó siempre en la demandada, acorde los artículos antes citados en el presente recurso, por lo que debió ser condenada al pago total de las cotizaciones previsionales mientras duró la relación laboral entre las partes.

En un segundo acápite, denuncia la infracción a los incisos 5°, 6° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo, en cuanto a la sanción de la nulidad del despido por interpretación errónea. En la instancia se declaró la relación laboral entre la demandante y la I. Municipalidad de Rengo. El juez de instancia desglosa todo el razonamiento conducente a tal declaración. No obstante, para efectos de la nulidad del despido -en el cual se verifica la infracción de ley de los incisos 5°, 6° y 7° del artículo 162-, estimó que esta no debe aplicarse por considerar que la norma está

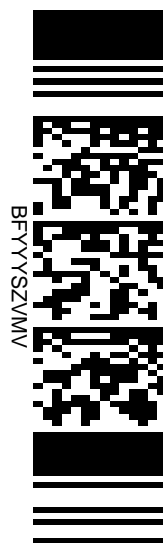


pensada para aquel empleador que retiene y no entera las cotizaciones.

Indica que el Tribunal no acoge la demanda de nulidad del despido, que corresponde justamente a la sanción que le cabe al empleador negligente que no cumple con su obligación de enterar las cotizaciones previsionales de su trabajador en las instituciones previsionales a las cuales este se encuentra afiliado. A mayor abundamiento, la norma del artículo 162 del Código del Trabajo y los incisos en comento no establecen que la sanción de la nulidad del despido solo es procedente cuando el empleador no es un organismo de la Administración del Estado, o está amparada por una presunción de legalidad. Esto es razonable por la simple lectura de la norma en relación, en conjunto con la intención de que tuvo legislador de proteger las remuneraciones, el artículo 41 y 58 del Código del Trabajo, el artículo 17 y 19 del Decreto Ley 3.500, y el artículo 8 del Código Civil, como lo ha establecido la Excelentísima Corte Suprema en los Fallos de Unificación de Jurisprudencia. Siguiendo la jurisprudencia uniforme de la Excelentísima Corte Suprema, a una relación laboral ya sentada y declarada correspondería aplicarle no sólo algunos derechos propios de este tipo de relación, sino que todos los que desprenden de ella, entre ellos la llamada "Ley Bustos" o Nulidad del Despido. El tribunal inferior debió interpretar correctamente y así aplicar las normas transcritas toda vez que la hipótesis se verifica en la sentencia, también la existencia de la relación laboral y considerando la naturaleza declarativa de la sentencia; asimismo, en razón al principio de supremacía de la realidad y al fundamento de la sanción de Nulidad del Despido o Ley Bustos.

Luego, en subsidio de lo anterior, opone la misma causal de infracción de ley, limitada en este caso sólo a la infracción del artículo 58 del Código del Trabajo y 17 y 19 del decreto ley 3500, bajo los mismos argumentos.

a)En cuanto al recurso de nulidad de la demandada:



Sexto: Que son hechos establecidos en la sentencia, inamovibles para ésta Corte al tenor de la causal principal de nulidad invocada, los siguientes:

1)Que, de las boletas electrónicas de honorarios acompañadas consta que la primera es de fecha junio del 2012, boleta que la demandante extiende a nombre de la Municipalidad de Rengo, por atención profesional, boletas que se extienden de manera continua de junio del 2012 a junio del 2021, todas a nombre de la Municipalidad de Rengo, lo que demuestra que en el año 2012, la demandante ya mantenía una relación laboral con la demandada.

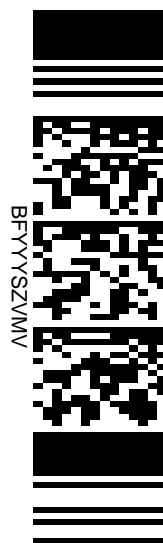
2)Que, el certificado de cotizaciones previsionales de la demandante, emitido por Fonasa el 01 de octubre del 2021, correspondiente al periodo de mayo del 2012 a junio del 2021, las cuales se encuentran declaradas y pagadas por la misma demandante, salvo las de julio, agosto y octubre del 2012, las que aparecen pagadas por el empleador Municipalidad de Rengo. Del oficio de AFP Plan Vital, donde aparece que los meses de junio, julio y septiembre del 2012, el rut pagador es el 69.081.200-2, correspondiente a la Municipalidad de Rengo, los demás periodos de diciembre del 2015 a diciembre del 2020 aparecen pagadas por la demandante.

3) Que, se estableció la efectividad de existir relación laboral entre las partes y periodo en que se verificó dicha relación laboral, la que comenzó en mayo del año 2012.

4) Que, de los contratos a honorarios agregados al proceso, consta que el último contrato de honorarios celebrado entre las partes es de fecha 29 de diciembre de 2017, el cual tiene como fecha de término de los servicios el 31 de agosto de 2018.

5) Que, la relación contractual de la demandante con la Ilustre Municipalidad de Rengo, era una relación laboral en los términos del artículo 7° del Código del trabajo, por cuanto se acreditó que existía un vínculo de subordinación y dependencia

6) Que la demandante cumplía un horario, según contratos de fechas 26-2-13 a 29-12-17, recibía una contraprestación en



dinero, según Boletas electrónicas de honorarios acompañadas a folio 20, correspondiente a los meses de junio del 2012 a junio del 2021, siendo su última remuneración bruta \$ 1.700.000.-

7) Que, en los contratos a honorarios se puede apreciar que la demandante gozaba de ciertos beneficios tales como licencias médicas, como la acompañada a folio 23, también que ella hacía uso de feriado legal, como se desprende de correo electrónico enviado por la demandante el 25 de marzo del 2019 a don Marco Zepeda, también gozaba de permisos, como se desprende de correo electrónico de fecha 26 de enero del 2021, enviado por doña Yosselin Moyano a la demandante.

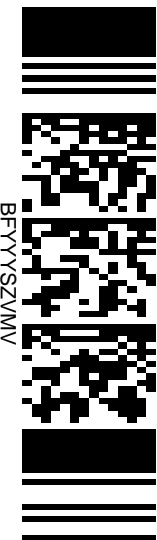
8) Que, de la cláusula tercera de los contratos a honorarios suscritos por la demandante con su ex empleador, además de la declaración de los testigos de la parte demandante, consta que tenía una obligación de asistencia, por cuanto cumplía una jornada de trabajo claramente definida.

9) Que la prestación de servicios fue en forma continua desde mayo del 2012 a junio del 2021.

10) Que la demandante recibía instrucciones de su superior jerárquico, lo que demuestra que recibía órdenes directas de un superior jerárquico, en este caso, del Director de Desarrollo Comunitario.

11) Que la actora no prestaba servicios respecto de un cometido específico, si no que ejercía varias funciones, las que no necesariamente decían relación con su profesión de Antropóloga, no siendo posible catalogarlos como cometidos específicos.

12) Que el contrato de honorarios que vinculó a las partes, fue continuo de mayo del 2012 a junio del 2021, sin que este haya terminado en agosto del 2018, para comenzar en septiembre del 2018, con una nueva forma de contratación a través del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, como lo señala en demandado, sino que siempre se dio en forma continua, cumpliendo con cada uno de los indicios para configurar un contrato bajo subordinación y dependencia.

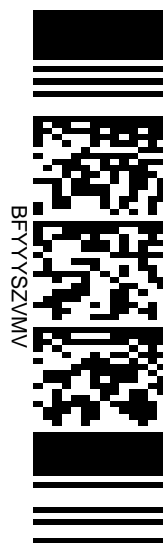


Séptimo: Que, debe recordarse que la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, busca establecer el recto sentido, alcance y aplicación de las disposiciones legales pertinentes, que tengan el carácter de decisoria litis, para lo cual se exige el reconocimiento y aceptación de los hechos por parte del recurrente, tal como han sido determinados en el fallo, los que, en consecuencia, no pueden ser alterados o modificados por esta Corte. En efecto, esta causal supone circunscribir la impugnación al aspecto puramente jurídico del asunto, buscando exclusivamente la recta aplicación del derecho, de manera que opera en el entendido que los hechos fijados en la causa son aceptados por el recurrente.

De este modo, "si el recurso desarrolla la infracción de ley a partir de hechos que no se tuvieron por acreditados en la sentencia o en torno a hechos distintos de aquellos que se han dado por establecidos en el mismo fallo o considerando hechos que no forman parte de los fijados en la resolución impugnada, tal arbitrio está destinado al rechazo" (Astudillo C., Omar; "El Recurso de Nulidad Laboral", Thomson Reuters, año 2012, pág. 77).

Lo dicho precedentemente resulta determinante para resolver el presente recurso, por cuanto las infracciones de ley que denuncia el recurso, se estructuran en base a supuestos fácticos diversos e incluso contrarios a los fijados por el juez a quo, lo que desde ya justifica el rechazo de la causal en estudio en la parte que desconoce la existencia de los elementos indiciarios de una relación laboral por el período en que la actora se encontraba contratada a honorarios y la continuidad del contrato desde el año 2012 al año 2021.

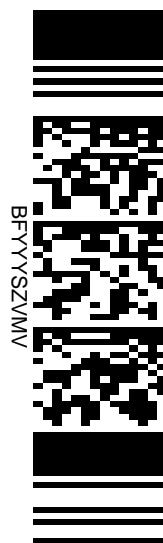
En efecto, cuestiona el recurrente en su recurso la ponderación probatoria practicada por el Tribunal en todos sus extremos, desde aquella que le llevó a concluir que concurrían los requisitos para estimar que entre las partes existió una relación laboral, como aquella por la que se estableció que existió continuidad de funciones entre la época en que la demandante se encontraba contratada a



honorarios con aquella en que se le contrató por la Ley de Compras Públicas, lo que implica que para efectos de acoger el recurso, éste Tribunal tendría que modificar los hechos ya asentados por el Tribunal a fin de hacer aplicables las disposiciones que alega como infringidas.

Octavo: Que, en lo que se refiere al período en que la demandante se vinculó a la Municipalidad por contrato a honorarios de conformidad al artículo 4° de la Ley N° 18883, esto es, desde mayo de 2012 a agosto de 2018, la recurrente no reclama la infracción del artículo 1° del Código del Trabajo por errónea aplicación, sino que se limita a sostener que no se cumplen los requisitos del artículo 7° del mismo cuerpo legal, a efectos de sustraer la relación contractual de la aplicación del artículo 4° de la Ley 18883. Así, considerando, como ya se dijera, que para que ello fuera posible se requeriría la alteración de las conclusiones fácticas de la sentencia, el recurso no puede prosperar.

Noveno: Que, deberá descartarse de inmediato, igualmente, las alegaciones referidas al rechazo de las excepciones de incompetencia y caducidad, pues ambas se fundan en presupuestos que correspondía al Tribunal resolver. En efecto, la incompetencia la opone la demandada bajo el supuesto que la relación entre las partes era de carácter civil, lo que fue descartado por el Tribunal, quien justamente fue llamado a resolver ese asunto o negocio, establecer la existencia de una relación laboral, para lo que era competente de conformidad a lo establecido en el artículo 420 del Código del Trabajo. En cuanto a la caducidad, esta se funda en que sólo podía discutirse la existencia de una relación laboral en ausencia de los requisitos que dispone el artículo 4° de la Ley 18883, y el último contrato a honorarios suscrito entre las partes fue en agosto del 2018; sin embargo, la demanda postula que existió una relación laboral entre las partes que habría concluido en junio del año 2021, lo que el Tribunal dio por establecido y, en ese escenario, la alegación que se realiza nuevamente se



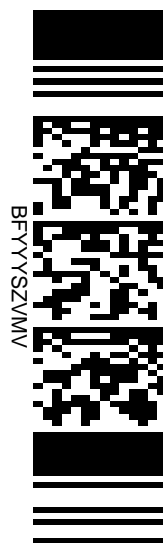
estructura en base a supuestos fácticos diversos e incluso contrarios a los fijados por el juez.

Décimo: Que, mención aparte requiere la infracción que se alega a la ley 19.886 y el D.S. 250 de 2004, que versa sobre contratos administrativos y suministro y prestación de servicios. En efecto, señala la recurrente que la actora a contar de septiembre del año 2018 y hasta el término de la relación contractual que las vinculó, estuvo sujeta al estatuto de la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, vínculo que no puede asimilarse a un contrato de trabajo, como se ha hecho con el contrato a honorarios que regula el artículo 4° de la Ley 18883.

Sobre este particular la sentenciadora determinó en el considerando vigésimo de la sentencia que "el contrato de honorarios que vinculó a las partes, fue continuo de mayo del 2012 a junio del 2021, sin que este haya terminado en agosto del 2018, para comenzar en septiembre del 2018, con una nueva forma de contratación a través del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, como lo señala en demandado, sino que siempre se dio en forma continua, cumpliendo con cada uno de los indicios para configurar un contrato bajo subordinación y dependencia, como se analizó en el considerando décimo quinto."

De lo anterior se sigue entonces que la sentenciadora estableció que la relación que unió a las partes durante todo el período en que la demandante prestó servicios a la entidad edilicia lo fue bajo una misma forma de contratación, descartando la prestación de servicios al amparo de la Ley 19.886, aplicando al efecto, el principio de primacía de la realidad.

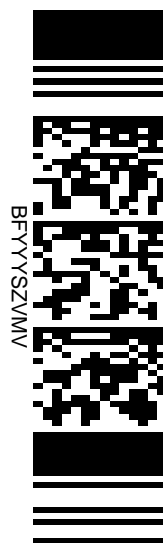
Undécimo: Que, entonces, no existe controversia en cuanto a que, al menos formalmente, hasta agosto del año 2018 la demandante se relacionó con la demandada a través de la suscripción de contratos a honorarios al amparo del artículo 4° de la Ley 18883, y que, a contar de septiembre del mismo año y, hasta el término de la relación se aplicó el régimen



establecido para la prestación de servicios de la Ley N° 19886, no obstante lo cual, la sentencia desestimó la existencia de éste último régimen, entendiendo que siempre se trató de un contrato a honorarios, y que en relación a éste último, concurrían todos los elementos para estimar que aquel encubría una relación de carácter laboral.

En tal entendido, entonces, para que la causal de nulidad de que se trata hubiese podido prosperar era necesario que se alterara la conclusión fáctica a la que arribó el Tribunal, en cuanto a la continuidad de las prestaciones durante todo el período en base a un mismo estatuto jurídico, desde que en base a los hechos asentados en la sentencia, las alegaciones de la recurrente no pueden sustentarse.

Duodécimo: Que, no obstante lo anterior, es dable señalar que aún cuando, tal como lo señala la recurrente, el artículo 3° letra a) de la Ley 19.886 señala que quedan excluidos de la aplicación de dicha Ley "Las contrataciones de personal de la Administración del Estado reguladas por estatutos especiales y los contratos a honorarios que se celebren con personas naturales para que presten servicios a los organismos públicos, cualquiera que sea la fuente legal en que se sustenten", lo que la lleva a concluir que la naturaleza jurídica de éste tipo de contrataciones se encuentra sujeta a un régimen diferente de las contrataciones a honorarios, lo cierto es que en definitiva, según lo establece el Reglamento de la ley recién mencionada, contenido en el decreto N° 250 del año 2004 del Ministerio de Hacienda, en su artículo 109, los convenios para la prestación de servicios personales por personas naturales "deberán ajustarse a las normas del decreto supremo N°98 del Ministerio de Hacienda, de 1991; el artículo 11 del decreto con fuerza de ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, en su caso, y 33 del decreto ley N°249, de 1974, o del artículo 13 del decreto ley 1.608, de 1976, y demás disposiciones que complementan o reglamentan dichos



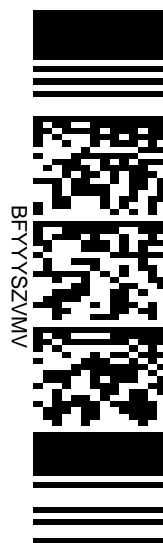
textos legales", normas todas que se refieren a la contratación a honorarios por parte de la administración del estado.

De esta forma, si seguimos la doctrina que sobre ésta materia se ha afianzado en la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema, la contratación de personas naturales por la administración del estado, que no cumpla los requisitos establecidos por los estatutos pertinentes, debe sustraerse de su aplicación procediendo a la supletoria que consagra el artículo 1 inciso 3° del Código del Trabajo, sin consideración a la normativa que amparó la contratación, es decir, no se ve limitada la aplicación supletoria sólo a los casos de contratación a honorarios que se establecen en los estatutos del personal de la administración del estado.

Décimo Tercero: Que, en relación a la primera causal de nulidad subsidiaria deducida por la parte demandada, se reclama por ésta la infracción en la apreciación de la prueba a las reglas de la sana crítica.

Sin embargo, y pese a denunciar infracción de las disposiciones reguladoras de la prueba llamadas a regir la materia, el recurso no cumple con las exigencias de procedencia señaladas en la ley, toda vez que silencia señalar determinadamente de qué manera se han conculcado las razones jurídicas, las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud han debido establecerse los hechos.

En efecto, refutados como lo han sido los presupuestos fácticos que sustentan lo resuelto, era de cargo del recurrente demostrar argumentativamente la conculcación de las normas que han permitido su establecimiento, carga a la que el compareciente no ha dado cumplimiento, toda vez que, omite desarrollar con el estándar que reiteradamente ha exigido esta Corte, la forma como se han desatendido las normas científicas, técnicas, simplemente lógicas o de la experiencia en la determinación de los hechos del proceso, lo que no se satisface con las meras afirmaciones en el sentido que la forma de ocurrencia de los hechos ha sido diversa de



la establecida por el Juez del fondo, haciendo sólo referencia en el recurso a que la prueba fue apreciada por el Tribunal con "una débil y poco profunda interpretación de hechos, actos y contratos diversos, asimilándolos como iguales, y de las mismas características, haciendo que el ejercicio de la sana crítica, se transforme en un ejercicio simplón, creyendo que situaciones diversas son en realidad equivalentes", pero sin especificar, como le era requerido, que regla de la sana crítica considera vulnerada y de que forma.

Por el contrario, lo reclamado por el recurrente se aparta de la causal invocada, desde que su alegación dice más bien relación con la no valoración de prueba rendida por su parte, lo que resulta contradictorio con la causal deducida, pues mal puede el Tribunal incurrir en infracción a las reglas de la sana crítica en relación a prueba que no ha valorado. En efecto, la causal se funda en que el Tribunal dejó de analizar prueba incorporada al juicio por la parte demandada, cuestión que no corresponde al motivo de nulidad que se ha invocado, sino a una causal distinta, cuál es la del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 459 n° 4 del mismo cuerpo normativo, lo que lleva, atendido el carácter de derecho estricto del recurso, al rechazo del mismo.

Décimo Cuarto: Que, en relación a la segunda causal subsidiaria invocada, señala la recurrente que el Tribunal habría omitido en la sentencia el requisito establecido en el artículo 459 N° 4 del Código del Trabajo, esto es, el análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estima probados y el razonamiento que conduce a dicha estimación.

Desde ya debe señalarse que de la simple lectura de la sentencia que se impugna es posible apreciar que ella establece los hechos que estima probados y el razonamiento que conduce a dicha estimación.

En cuanto al análisis de la prueba rendida, acusa la recurrente que en la sentencia no se analiza la prueba rendida por su parte, en particular, el contenido de los decretos Alcaldicios y los términos técnicos de referencia de



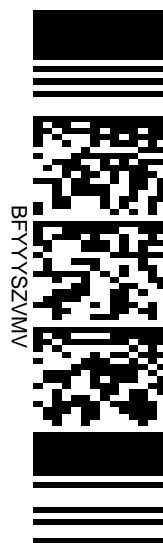
los tratos directos en conformidad a lo dispuesto en el artículo 107 del D.S. 250 de 2004 Reglamento de compras públicas y tampoco se analizan a conciencia (sic), los contratos a honorarios.

A diferencia de lo que reclama la recurrente, se advierte que la prueba que denuncia como omitida fue profusamente analizada por la sentenciadora desde el considerando décimo tercero en delante de la sentencia recurrida, en los que analiza detalladamente la prueba documental a que se hace referencia.

Lo que subyace en realidad de ésta alegación es la disconformidad de la demandada con la ponderación probatoria que el Tribunal realiza, mas no la omisión de su análisis, cuestión ajena al presente recurso, pues como es sabido, éste Tribunal se encuentra impedido de revisar la apreciación probatoria realizada en la sentencia, salvo que en ella se hayan infringido reglas de la sana crítica.

A mayor abundamiento, la sentenciadora, en el motivo vigésimo cuarto de la sentencia señaló expresamente que la prueba rendida ha sido analizada conforme a las reglas de la sana crítica, y la no ponderada expresamente, no altera las conclusiones a que se ha arribado en esta sentencia, lo que implica una valoración negativa de la prueba restante, en cuanto se establece su impertinencia.

Décimo Quinto: Que, en cuanto al reclamo que se formula por la aplicación a la parte demandada del apercibimiento contemplado en el artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo, el Tribunal señaló, en el motivo octavo de la sentencia que "la parte demandada ha señalado que ha exhibido toda la prueba existente en la Municipalidad, y lo que no exhibe es porque no existe, o no ha tenido acceso a dicha información, argumentos débiles para justificar la no exhibición de los documentos, los que son relevantes para determinar la fecha de inicio de la relación laboral y la naturaleza de la misma, por lo que se acoge el apercibimiento solicitado y se tendrán por probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba decretada".



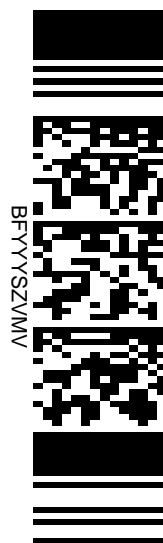
Considerando que resulta facultativo para el Tribunal la aplicación del apercibimiento de que se trata, cuando sin causa justificada se omite la presentación de los documentos que se ha ordenado exhibir y, que, la única justificación entregada por la Municipalidad demandada apareció como vaga y débil para el Tribunal, más aún si como se comprobó habían otros antecedentes que hacían presumir la existencia de tal documentación, el Tribunal ha obrado conforme a las facultades que la disposición legal le ha entregado y, por ende, no procede la revisión de tal medida adoptada.

b) En cuanto al recurso de nulidad de la demandante:

Décimo Sexto: Que, la demandante dedujo recurso de nulidad fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo y denuncia la infracción al artículo 162 del mismo cuerpo normativo, fundado en que la sentencia no hizo lugar a declarar la nulidad del despido.

En efecto, la sentenciadora en el motivo Vigésimo Tercero de la sentencia resolvió: "Que, de los documentos señalados, aparece que la demandada no retuvo ni enteró cotizaciones de seguridad social a favor de la actora y siendo la sanción establecida por el inciso 5° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo, establecida para quien retiene y no entera tales sumas de dinero, se rechazará la demanda a su respecto".

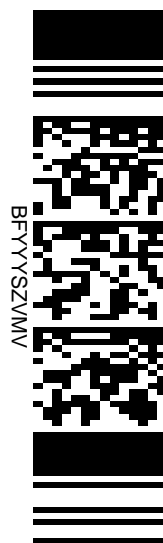
Décimo Séptimo: Que, en relación a este punto la jurisprudencia reciente y uniforme de la Corte Suprema ha señalado que, "en lo que concierne a la procedencia de aplicar la sanción establecida en los incisos quinto y siguientes del artículo 162 del código del ramo, cuando la relación laboral entre un particular y la Administración del Estado ha sido establecida mediante una sentencia judicial, materia en que también se verifica la existencia de interpretaciones diversas en relación a una cuestión jurídica proveniente de tribunales superiores de justicia que conduce a determinar cuál postura debe prevalecer y ser considerada correcta, resulta útil expresar que la materia objeto de la litis ya fue conocida por esta Corte según dan cuenta



sentencias dictadas en las causas roles números 4.1500-2017; 37.339- 2017; 36.601-2017 y últimamente en los roles 28.229-2018, 32.749-2018, 4.440-2019, 1.403-2020, 1.409-2020 y N° 42.863-2020, entre otras, en las que se unificó la jurisprudencia en el sentido que, tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido. Que, en otra línea argumentativa, la aplicación -en estos casos-, de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido." (Corte Suprema, Rol N° 2819-2020).

Décimo Octavo: Que, atentos a la doctrina asentada por nuestro máximo Tribunal y, aún cuando la que sostiene el a quo sea distinta a la que ahora se trae aparejada, lo cierto es que, cualquiera de las interpretaciones de que se trata llevan necesariamente al rechazo de la demanda en su parte que solicita la declaración de la nulidad del despido y de la aplicación de la sanción que establece el artículo 162 del Código del Trabajo, razón suficiente para rechazar el recurso en esta parte, por carecer de influencia en lo dispositivo.

Décimo Noveno: Que, denuncia también ésta recurrente la infracción de los artículos 58 del Código del Trabajo y, 17 y 19 del decreto ley 3500, por falsa aplicación de ley, tanto

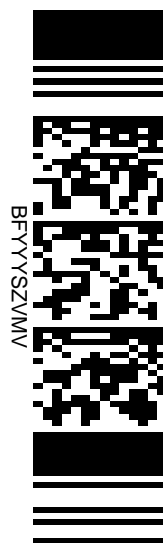


en la causal de nulidad principal como subsidiaria. Señala que la demandada le adeuda a su representada cada una de las cotizaciones de seguridad social, propias de la existencia de una relación laboral, por todo el período trabajado.

Sobre éste particular la sentenciadora consideró en el motivo vigésimo sexto de la sentencia complementaria "Que, atendido lo razonado en los considerandos vigésimo segundo y tercero, los que se dan por reproducidos, no se acogerá la demanda en cuanto a lo solicitado en la letra f) parte petitoria, referente a las cotizaciones de seguridad social (AFP, SALUD y CESANTIA) por todo el periodo que duró la relación laboral, por cuanto la demandada no retuvo las cotizaciones previsionales, en consecuencia, no procede el pago de descuentos que no realizó a la actora."

De lo dicho debe destacarse, en primer lugar, que es un hecho de la causa que la demandada no descontó de los estipendios pagados a la actora, los montos correspondientes a cotizaciones previsionales; luego, debe recordarse, también, que tal como se señalara precedentemente, es un hecho de la causa que del certificado de cotizaciones previsionales de la demandante, emitido por Fonasa el 01 de octubre del 2021, correspondiente al periodo de mayo del 2012 a junio del 2021, consta que las cotizaciones de salud se encuentran declaradas y pagadas por la misma demandante, salvo las de julio, agosto y octubre del 2012, las que aparecen pagadas por el empleador Municipalidad de Rengo; asimismo, del oficio de AFP Plan Vital, aparece que los meses de junio, julio y septiembre del año 2012, aparecen pagados y que el rut pagador es el 69.081.200-2, correspondiente a la Municipalidad de Rengo, y los demás períodos, de diciembre del 2015 a diciembre del 2020, aparecen pagadas por la demandante.

Si bien es cierto el artículo 58 del Código del Trabajo dispone que el empleador debe deducir de las remuneraciones las cotizaciones de seguridad social y, que por su parte, el artículo 19 del Decreto Ley 3500 establece que las cotizaciones previsionales deben ser declaradas y pagadas por

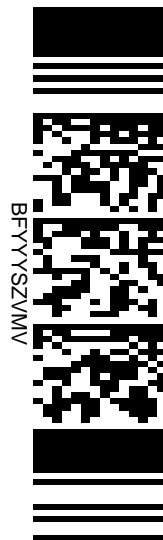


el empleador, no es menos cierto que según lo establece el artículo 17 de éste último cuerpo normativo los obligados a cotizar son los trabajadores afiliados al sistema y que, igual obligación pesa sobre el trabajador independiente a que se refiere el inciso tercero del artículo 90, sin perjuicio de lo establecido, igualmente, en el N° 1 de esa misma disposición.

En ese orden de ideas, resulta aplicable a ésta materia la doctrina sostenida por la Corte Suprema, en sendas sentencias de unificación de jurisprudencia, que al referirse a la nulidad del despido, ha señalado que tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad.

Así, si consideramos, entonces, tal como lo ha manifestado la jurisprudencia recién citada, que los contratos a honorarios fueron suscritos al amparo de un estatuto legal que en principio les otorgó una presunción de legalidad y, que con ocasión de ello, no se efectuaron descuentos a la demandante, quien por lo demás pagó directamente sus cotizaciones previsionales y de salud, en el último caso por todo el período y en el primero, parcialmente, no procede condenar al Municipio al pago de dichos conceptos desde que, atentos al estatuto legal presuntivo que relacionó a las partes, era la trabajadora independiente quien se encontraba obligada a enterar sus cotizaciones, más aún si recibió de la demandada el monto en dinero que debía ser destinado a dicho pago, tratándose, aún presuntivamente, de un afiliado independiente a esa fecha.

De resolver lo contrario, se generaría para la demandante un doble pago, al haber recibido el monto completo de su remuneración, y obteniendo, además, el pago de sus



cotizaciones por cuenta del empleador, cuando aquellas, en la actualidad, son de cargo del trabajador.

Vigésimo: Que, en dicho contexto, el recurso debe ser desestimado primero, en su parte que solicita el pago de cotizaciones de pensiones y de salud por todo el tiempo trabajado ya que, en su mayoría, como se detallara, ya se encuentran pagadas por la trabajadora, y por ende, correctamente solucionadas, y segundo, y en cuanto a aquellas no pagadas, porque habiendo percibido la trabajadora los montos que debieron destinarse al pago de las cotizaciones, bajo el contexto de un empleo a honorarios revestido de una presunción de legalidad, era de su cargo efectuar el pago, en alguna de las formas que prevee el artículo 90 y 92 del DL 3500, entendiéndolo así la actora, quien en el hecho realizó por prácticamente todo el período, el pago de sus cotizaciones previsionales y de salud.

Entendido así, no resulta aplicable al caso la presunción que establece el artículo 3° de la Ley N° 17.322 y su consecuente sanción, ya que antes de la dictación de la sentencia por la que se reconociera la existencia de una relación laboral, la administración actuó prevalida de una presunción de legalidad, frente a la cual no se encontraba facultada para efectuar las retenciones a que se refiere el artículo 58 del Código del Trabajo.

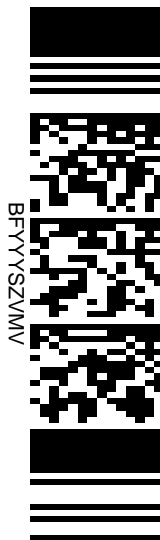
Atentos a lo anterior, y a los hechos establecidos en la sentencia, ésta última no ha incurrido en la infracción legal que se reclama, por lo que el recurso será rechazado.

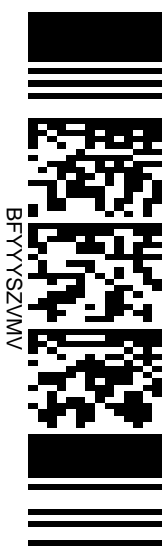
Y visto lo dispuesto en los artículos 477, 478, 479 y demás pertinentes del Código del Trabajo, **SE RECHAZAN**, sin costas, los recursos de nulidad interpuestos por la parte demandada y demandante en contra de la sentencia de fecha 26 de noviembre, aclarada por la de uno de diciembre, ambas del año 2021, dictada por el 1° Juzgado de Letras de Rengo, en los autos RIT O-112-2021, la cual no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la abogado integrante Sra. Latife.

Rol N° 1202-2021.Ref.Lab.-





BFYYSZVMV

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua integrada por Ministro Presidente Miguel Santibañez A., Ministro Michel Anthony Gonzalez C. y Abogada Integrante Maria Latife A. Rancagua, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós.

En Rancagua, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

